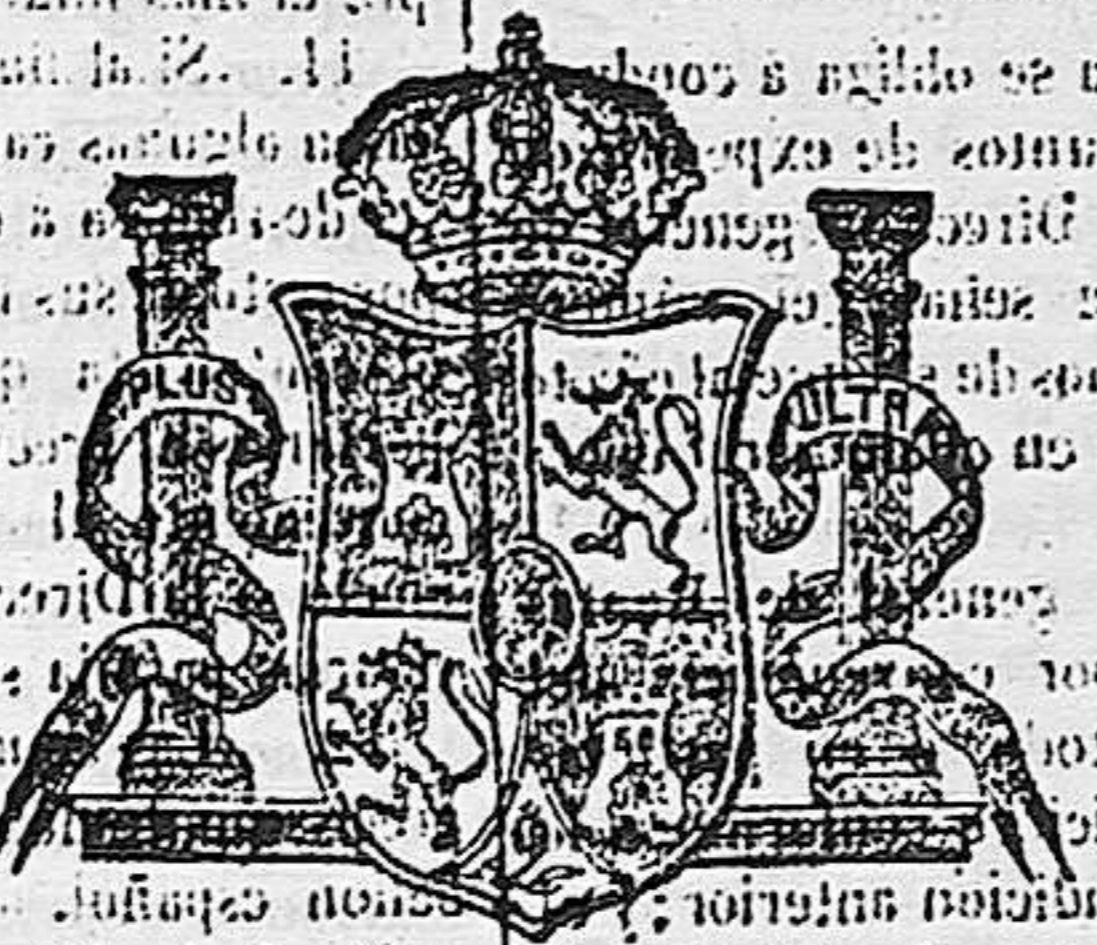




Boletín Oficial



DE LA PROVINCIA DE ORENSE.

Se publica los martes, jueves y sábados de cada semana. Se suscribe en la imprenta de D. Cesáreo Paz y Hermano, Fuente del Rey número 10, a 8 reales al mes para esta ciudad. Por trimestres adelantados. Números sueltos a 4 reales. Pliegamos de 20 y 30 céntimos.

PARTE OFICIAL.

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.

S. M. la Reina nuestra Señora Doña Isabel II y su augusta Real familia continúan su bondad en esta Corte en su importante salud.

ARTICULO OFICIAL.

GOBIERNO DE PROVINCIA.

Número 525. En la Gaceta de Madrid número 276 del domingo 3 del actual se halla inserto lo siguiente: el artículo 1.º de la ley de 14 de octubre de 1856.

EXPOSICIÓN DE S. M.

Señora: Ninguna de las reformas acometidas desde fines del último siglo ha influido en el acrecentamiento de la riqueza como la que en distritos de España ha entrado a la circulación y obediencia de los intereses individuales, la inmensa propiedad que al través de los siglos habían acumulado y estancado en ciertos puntos de diferentes clases.

Las formas guardadas en la adopción de tales medidas, respecto a los bienes de beneficencia, han sido la causa principal de la contradicción que sufrieron y de la suspensión en 1809. Actualmente se encuentran, pero si esta suspensión la apoyan algunas consideraciones en la parte que lo exigen las poblaciones de España, que está en los sentimientos del Gobierno de V. M. respetar no hay razón para que también pese sobre la que no tiene al Estado más atencio-

nes que la del bien público, hermanado con el de las corporaciones interesadas. La ley de 14 de mayo de 1855, dictada con el fin de desamortizar la propiedad territorial, declaró en venta, entre otros, los bienes del dominio del Estado, los del secano del ex-infante D. Carlos, los de beneficencia, los de instrucción pública, los de las provincias, los de los pueblos y los pertenecientes a algunas muertas de carácter civil, y según aquella ley y la de 11 de julio de 1856, que introdujo en la primera importantes modificaciones, venían enagenándose dichos bienes al expedirse el Real decreto de 14 de octubre de 1856, que suspendió la enajenación.

Cuando en todos tiempos y por todos los países de Europa se ha reconocido la necesidad y conveniencia de crear, con la debida indemnización, el poder de las corporaciones, su propiedad inmueble para hacerla más productiva, convirtiéndola sus menudas rentas en otras más ereditivas y de manejo más fácil; cuando la evidente prosperidad del país, por efecto particularmente de la desamortización en la escala con que se realizara por completo esta reforma, de tan antiguo reclamada e iniciada, meces de creer que la razón del decreto de 14 de octubre citado, en lo referente a las bienes de que se trata, fuera otra que la de procurar todavía en la enajenación acordada por las leyes suspendidas o acordadas por las leyes suspensores, ventajas que las que de sus disposiciones habían de reportar las corporaciones y el Estado. Otra idea habría de haberse en vigor dichas leyes o suspensores, de su abrogación y las Cortes restableciendo las disposiciones anteriores, por las cuales, aunque con algunas condiciones y en circunstancias dadas, enajenaban sus bienes el Estado, las corporaciones civiles; pero en alguna situación en este particular es necesario decidir, porque la Administración se encuentra hoy sin reglas entre legislaciones tan contrarias.

Si se oye al Gobierno, quedará ley de 14 de mayo de 1855 y 11 de julio de 1856, abrogadas las mejores bases para la enajenación de los bienes del dominio del Estado, de las provincias, de los pueblos de beneficencia y de instrucción pública y de algunas muertas civiles, de modo que las mismas muertas fueran todo lo que resultara de los resultados de la venta de los que debían serlo, la cuestión de si se resolvería, derogando simplemente el Real decreto de 14 de octubre de 1856. Pero a juicio del Gobierno, si bien con las condiciones que han fijado para la venta de las fincas aseguran en esta parte

los intereses de las corporaciones, no puede decirse lo mismo de las que se refieren a la redención de censos, cuyos tipos de capitalización, excesivamente ventajosos para los censatarios, son perjudiciales a las corporaciones y establecimientos interesados. El Gobierno, no constituyendo los bienes de tales fincas una masa común, y habiendo de venderse por su cuenta respectiva los de cada una, puede asegurarse desde luego que con los tipos preferidos en dichas leyes para la redención y venta de los censos, y considerados como tales los predios de arrendamiento anterior al año de 1800, según la ley de 27 de febrero de 1856, aquellas corporaciones y establecimientos que no constituyen una venta de las mismas fincas, sobrepreciosas las rentas a compensar las diferencias de las rentas en las anualidades hasta la redención de los plazos de pago y la que deba resultar entre el valor nominal de los censos y el rédito que pueda producir el capital de su redención y venta, necesariamente han de experimentar pérdidas. Pero si se atiende a que el precio de estos de que fijados para la redención y venta de censos al contado los tipos de 10 por 100 en los de menor cuantía y de 12 por 100, o sea el medio de 9 por 100, y aun supuestas las altas necesidades a 3 por 100, se reduce el capital a la tercera parte, que puede producir lo que el fondo por ventajoso empleo que se le da. Las condiciones para las corporaciones y establecimientos, cuyas rentas consistan principalmente en censos, no pueden más que ser muy perjudiciales, y aun aquellas que no poseen tales censos, no se resisten a las altas necesidades de sus fincas de sus rentas en los años que tienen que mediar hasta que los compradores entreguen lo bastante para producir una renta igual a la que gozaban, quede todavía un remanente de capital, que habrá de ser la redención de los censos, rindiendo tanto como los de los censos, sin grandes gravámenes que ulteriormente recaerán sobre las corporaciones.

Ya la ley de 14 de mayo de 1855 preveía este caso y si bien por lo que hace a los establecimientos de beneficencia lo resolvió impulsado el Tesoro a déficit que resultase, debía en el subterfugio a las demás corporaciones, aunque alcanzasen también sus mismos efectos, porque la obligación del Tesoro para con ellas consistía de un simple anticipo de la ley de 14 de mayo de 1855, grandes gravámenes que ulteriormente recaerán sobre las corporaciones. Conviene, por lo tanto, a las corpora-

ciones y al Estado que los tipos de capitalización de los censos que hayan de redimirse o venderse a pagar de contado se reduzcan lo bastante a cubrir debidamente sus intereses, excitando al mismo tiempo el de los censatarios, y en su defecto el de los compradores.

Por más que las razones expuestas justificasen esa modificación, aunque el Gobierno adoptase por sí respecta demasado las atribuciones de las Cortes para acordar la suya, preyo, concurso, y en tal concepto, al haber de proponer a V. M. que derogando en este punto el Real decreto de 14 de octubre de 1856, se continuara en ejecución de las fincas de propiedad del Estado, del secano del ex-infante D. Carlos, de beneficencia, de instrucción pública, de las provincias, de los propios de los pueblos y de algunas muertas de carácter civil, énteramente a las leyes de 14 de mayo de 1855 y 11 de julio de 1856, considero convenientemente aconsejar también a V. M. que siga la actual suspensión de redimir y vender los censos y foros de la misma provincia en que las Cortes resisten y agrada de los dichos que las redenciones y ventas hayan de hacerse en lo sucesivo.

De esta suerte, Señora, satisfaciendo un deseo que se halla en el sentimiento de la opinión pública, atendiendo a que es necesario política y económica, y volviendo las cosas a su estado normal, donde es dable a su favor de legalidad, al paso que se evitan los perjuicios que al Estado, a las corporaciones y a los establecimientos mencionados podrían resultar de redimirse y venderse sus censos y foros, según dichas leyes, no se demoran los inmensos beneficios que habrán de reportar con la enajenación inmediata de sus fincas, beneficios igualmente extensivos al país, en general, y que se harán todavía mayores, si, como el Gobierno lo espera, las Cortes adoptan sobre los productos de la desamortización el conjunto de medidas que le serán propuestas, en cuya virtud, al tiempo que las corporaciones interesadas obtendrán con toda seguridad, no solo sus actuales rentas, sino el aumento a que pueden aspirar, se podrá también en manos del Estado, la anticipación de medios que necesita para ejecutar las grandes empresas de obras públicas en que está comprometido, las que debe acometer si el país ha de desarrollar toda la riqueza que encierra, y para atender a otros objetos que le exigen el poder y el crédito de la Nación a la altura que corresponde.

En consecuencia de lo expuesto, los Ministros de V. M. tienen la honra de

se meter á su aprobacion el adjunto Real decreto.
Madrid 2 de octubre de 1858.—SE-
ÑORA.—A L. P. de V. M.—Leopoldo
O'Donnell.—Saturnino Calderon Collan-
tes.—Santiago Fernandez Negrete.—
José Maria Quesada.—Pedro Salaverria
—José de Posada Herrera.—Rafael de
Bustos y Castilla.

REAL DECRETO.

Conformándose con lo propuesto por mi Consejo de Ministros, Vengo en decretar lo siguiente:

Artículo 1.º Los predios rústicos y urbanos de propiedad del Estado, los del secuestro del ex-Infante D. Carlos, los de Beneficencia e Instruccion pública, los de las provincias y propios y comunes de los pueblos, y los pertenecientes á manos muertas de carácter civil, declarados en estado de venta por la ley de 1.º de mayo de 1855, continuarán enajenándose con arreglo á la misma ley y á la de 11 de julio de 1856.

Art. 2.º Hasta que las Cortes resuelvan los tipos de capitalizacion que en lo sucesivo hayan de regir, seguirán en suspenso la redencion y venta de los censos, foros y fincas de arrendamientos anteriores al año de 1800, declaradas como censos por el art. 2.º de la ley de 27 de febrero de 1856.

Art. 3.º Se observarán los reglamentos, instrucciones y órdenes anteriormente dictadas para la ejecucion de las mencionadas leyes de 1.º de mayo de 1855 y 11 de julio de 1856 en lo que se refieren á la venta de las lucas expresadas en el art. 1.º

Art. 4.º El Gobierno dará oportunamente cuenta á las Cortes del presente Real decreto, para cuyo cumplimiento se adoptarán por el Ministerio de Hacienda las disposiciones correspondientes.

Dado en Palacio á 2 de octubre de 1858.—Está rubricado de la Real mano.—El Presidente del Consejo de Ministros, Leopoldo O'Donnell.

Lo que se inserta en el Boletín oficial para conocimiento del público. Orense 6 de octubre de 1858.—El Gobernador, Hermenegildo Guilian.

Número 526.

En la Gaceta de Madrid número 273 del jueves 30 de setiembre último se lee lo siguiente:

DIRECCION GENERAL DE RENTAS ESTANCADAS.

Por Real orden fecha 21 del actual se ha servido S. M. la Reina (Q. D. G.) aprobar el siguiente

Pliego de condiciones bajo las cuales la Hacienda pública subasta el servicio de conducciones marítimas de sal en la Península é islas Baleares.

OBJETO Y DURACION DEL CONTRATO.

1.º La Hacienda pública contrata el servicio de conducciones de sal desde los puntos de surtido á los alfolíes y depósitos marítimos de la Península é islas Baleares, entendiéndose por puntos de surtido las fábricas, los depósitos y cualquiera alfo-

lfolí simple que la Direccion señale por conveniencia del servicio.

2.º La contrata empezará á tener efecto el día 1.º de enero de 1859, y concluirá en 31 de diciembre de 1862.

DEBERES DEL CONTRATISTA.

3.º El contratista se obliga á conducir á cada uno de los puntos de expedición ó de depósito que la Direccion general de Rentas Estancadas le señale, el número de quintales castellanos de sal que al efecto le consigne la misma en cualquiera época del año.

4.º La Direccion general de Rentas Estancadas podrá, por conveniencia del servicio, variar en todo ó en parte las consignaciones que hiziere conforme á lo preceptuado en la condicion anterior; y el contratista no tendrá derecho á indemnizacion ni resarcimiento de perjuicios por esta causa, con cuyo motivo le avisará con 15 días de anticipacion al en que las variaciones deban causar efecto.

5.º Formarán parte de este servicio de conducciones marítimas, y serán de cuenta del contratista todos los gastos que causen la conduccion y trasbordo de sal desde las eras de cargadas ó almacenes hasta los buques, así como los que ocurran en la descarga y conduccion de la sal hasta dejarla entrojada en los almacenes destinados al efecto, y los derechos de navegacion que se exigen ó puedan exigirse en lo sucesivo á los buques conductores de sal, sea cual fuere su importancia.

Es obligacion del contratista, además el conducir, embarcar y trasbordar por su cuenta la sal á los buques que hacen la exportacion para el extranjero de cualquiera de las fábricas nacionales.

6.º Las remesas deberá empezarse con oportunidad; pero si no lo hiziere, y por esta causa resultaren faltas de surtido, será responsable el contratista de todas las consecuencias que se originen de ellas.

7.º Tendrá siempre en alfolíes y depósitos el repuesto permanente de sal que á cada uno se designa en la adjunta nota; y cuando faltase al cumplimiento de esta condicion, los Administradores principales de Rentas Estancadas ó los subalternos, avisarán á los Gobernadores ó á la Direccion, segun la urgencia del caso, quienes mandarán hacer remesas desde las fábricas, ó de unos á otros alfolíes ó depósitos, hasta completar la indicada existencia permanente y asegurar el surtido para consumidores, quedando el contratista obligado á pagar el sobreprecio de fletes y gastos que cause su falta, y á reponer inmediatamente en los almacenes que socorran la sal de ellos extraida para los socorridos. Cuando sea preciso poner en práctica lo preceptuado en esta condicion, se celebrarán los ajustes de fletes y demas operaciones por los funcionarios de la Hacienda á presencia de un Escribano y previa citacion del representante del contratista, levantándose acta testimoniada por cada caso, que servirá de cargo para el reintegro que deberá hacer el contratista, y que se le descontará en el primer pago que deba hacerse, bien sea en la provincia donde haya la falta ó en cualquiera otra, si en la primera no hubiese crédito suficiente á su favor; así como los demas gastos que en todos conceptos originen estos incidentes.

8.º Si los ajustes de fletes y demas gastos fuesen á precios mas bajos que el de la contrata, no tendrá derecho el contratista á percibir las diferencias.

9.º Tampoco tendrá derecho á reclamar perjuicios por ningun concepto sobre accidentes que puedan ocurrir durante su contrato, porque lo hace á suerte y ventura. Se exceptúan únicamente justificados y averías gruesas plenamente justificadas por los medios y con las formalidades que establece el Código de Comercio, si bien en este caso responde de la parte que segun el fallo de los Tribunales corresponde en el siniestro á los Capitanes, Patrones ó navieros.

10. En las justificaciones de naufragios y averías gruesas habrá de intervenir siempre el Promotor fiscal; y si no le hubiere, el funcionario que tenga la representacion de la Hacienda en el punto en que deban practicarse será siempre el mas inmediato al de la ocurrencia.

11. Si al finalizar el contrato resultasen algunas cantidades de sal pendientes de remesa á cualquier alfolí ó depósito por resto de sus respectivas consignaciones, el contratista quedará obligado á trasportarlas al precio de su contrata, si fuere conveniente al Estado, ó á dejarlas sin efecto si la Direccion las considera innecesarias para la seguridad del surtido.

12. Las conducciones se verificarán precisamente debajo de cubierta y en pabellon español.

Queda la Direccion general de Rentas Estancadas en libertad de disponer, cuando lo juzgue conveniente á los intereses de la Hacienda, que se cierren y sellen las escotillas de los buques conductores.

13. El contratista tendrá un representante ó comisionado, competentemente autorizado por él, en cada uno de los puntos en que haya de recibir y entregar sales por efecto de su contrata.

14. Los Capitanes de los buques conductores recibirán en las fábricas, depósitos ó alfolíes la sal que deban trasportar, pesada fielmente; y firmados que sean los documentos de resguardo, y los demas precisos y convenientes al caso, se harán á la vela é irán directamente al puerto de su destino, fondeando en él sin acercarse á las demas embarcaciones, hasta dar aviso á la Administracion de su llegada y recibir á bordo el sobrecargo del Resguardo.

Se exceptúan únicamente de este caso aquellos en que el temporal, avería ú otra causa trascendental y justificada lo impidiese.

15. Admitidos que sean á libre plática, harán los Capitanes fiel entrega de la sal al Administrador del alfolí ó depósito en los términos prescritos en la condicion 5.º

16. La sal se entregará limpia y en el estado natural que salga de las fábricas, depósitos ó alfolíes; y para su comprobacion presentarán los Capitanes un escandalo, que recibirán de los Administradores de aquellos establecimientos en la forma que la Direccion determine, bien sea en saco, lata, caja ó medio, que consista en ser mas conveniente; y si los empleados que deban recibirla la hallasen sobrecargada de humedad, adulterada ó de cualquiera manera defectuosa, harán que se deposite por cuenta y con intervencion del contratista, hasta que se halle en estado de ser admitida, si el defecto procediese solo de humedad, ó se acuerde por la Direccion lo que corresponde, si tuviese otro origen ó causa.

17. La Hacienda no pagará el porte de las sales que en las remesas excedan de la cantidad guiada, y aquellas ingresarán en los almacenes, extendiéndose acta y reuniéndose la Junta administrativa para que dicte el fallo que corresponda á la defraudacion de esta clase, con arreglo al párrafo quinto del art. 19 del Real decreto de 20 de junio de 1852.

18. Cuando los Capitanes ó Patrones conductores presenten menos sal que la que exprese la guía, el contratista satisfará las faltas que resulten al doble precio del de estanco.

19. En el caso de arribada forzosa, que deberá evitarse lo posible y justificar despues su necesidad, estarán obligados á dar aviso inmediatamente á los Administradores de depósitos ó alfolíes, ó al Alcalde del punto adonde arriben, si no hubiere empleado de la Hacienda, así como el mas caracterizado de Marina que allí existiere; haciendo la declaracion motivada del arribo, con arreglo á lo que dispone el Código de Comercio, y pasando copia de ella dentro de las primeras 24 horas á los expresados empleados, para que en su vista pueda la Administracion despues

adoptar las disposiciones que la convengan.

20. Si la arribada fuese por avería, despues del aviso á los indicados funcionarios de la Hacienda y de acuerdo con ellos, los Capitanes presentarán otro buque que puesto á su costado reciba el todo ó parte de la carga que sea preciso alijar para reparar aquella, cuyo buque permanecerá como el conductor separado de los demas que hubiere en el puerto y con sobrecargos del resguardo ó de agentes de confianza de la Autoridad local donde no le hubiere, hasta que reparada la avería vuelva la sal al expresado buque conductor; porque se prohíbe absolutamente su desembarco fuera del punto de su destino.

21. El contratista deberá encargarse á los Capitanes el cumplimiento de las disposiciones anteriores; advirtiéndoles que si dejaran de cumplir alguna, no volverá á facilitárseles carga en ninguna salina ni depósito; en el concepto de que ni la arribada, ni la avería, servirán de excusa á el mismo para dejar de ser responsable de todas las consecuencias y perjuicios que produzca el retraso con que verifique el surtido á los depósitos y alfolíes.

22. Quedará en libertad de trasportar el mayor número de quintales que pueda conducir por cuenta de los pedidos que le haga la Direccion general de Rentas estancadas, siempre que lo permita la cabida de los almacenes que la Administracion tenga para este servicio; pero si llegase el caso de llevar mas de la que estos puedan contener, será de cuenta y cargo del contratista el proporcionar uno á propósito en que tenerla, por el tiempo que fuese necesario; así como los demas gastos que esto pudiera ocasionar.

23. Al presentar buques conductores para la carga en los puntos de surtido, el contratista ó su representante en ellos entregará á los respectivos Administradores un conocimiento por triplicado, sin enmiendas ni raspaduras y con numeracion correlativa, en cada fábrica, que exprese el nombre del Capitan conductor, el del buque que mande, la matrícula á que corresponda, su importe en toneladas españolas, el alfolí á que va destinada la remesa, el número de quintales de que se componga, el estado en que reciba el género, y por último, la obligacion de ponerlo en el punto de su destino, sin adulterar, enjuto y limpio, como saldrá de las fábricas y los depósitos en el plazo prefijado en la guía, y los Administradores no permitirán la salida del buque hasta despues de cumplidos estos requisitos.

De los tres ejemplares del conocimiento de que se trata en el párrafo anterior, los Administradores de los puntos de surtido se reservarán uno, como justificante en cualquier caso de todos y cada uno de los pormenores que debe comprender; remitirán otro, por el correo mas inmediato al día en que salga la remesa, al Administrador del alfolí ó depósito adonde esta fuere destinada, á fin de que se tenga presente al recibirse la sal, y enviarán el ejemplar restante directa é inmediatamente á la Direccion general de Rentas Estancadas, para que obre en la misma los efectos correspondientes.

24. En las guías que acompañen á cada remesa llevará marcado el tiempo dentro del cual, fuera de un temporal justificado ú arribada inevitable por avería, deberán hacer la entrega de la sal en los puntos de su destino. En otro caso, si no justifica plenamente su inculpabilidad en el retraso, perderá la mitad de los fletes, sin perjuicio de las demas consecuencias que origine con este motivo.

25. Quedará obligado el contratista á entregar las correspondientes tornaguías en los puntos de partida de las sales en el plazo de 15 días, á contar desde el siguiente al en que se verifique la entrega en alfolíes ó depósitos; pero si trascurriese el periodo de conduccion concedido en la guía, que se regulará siempre por el que en término medio se conozca en viajes benéficos, y á mas el señalado para la entrega de la tornaguía, se comprenderá

que la sal no ha llegado á su destino, y el contratista satisfará inmediatamente en la Tesorería de Hacienda pública de la provincia respectiva, y al doble precio que el de estanco, el importe de la remesa que la falle, al menos que no hubiese previamente acreditado, hallarse detenida en algún punto por temporal ó avería justificadas.

26. Si por cualquier causa ó pretexto el contratista hiciera abandono del servicio, la Administración lo verificará por su cuenta, disponiendo los ajustes en la forma que indica la condición 7.ª hasta un mes después de otorgar nuevo contrato; quedando responsable al pago de los sobrepagos de las remesas que se hagan por su cuenta y de la diferencia de mas que resulte entre su contrata y la nueva estipulación por todo el tiempo que aquella habria durado, cubriéndose esta responsabilidad con su fianza y la cantidad que en venta produzcan los bienes que se le embargarán, según lo prescrito en el artículo 19 de la Real Instrucción de 15 de setiembre de 1852; pero si el precio obtenido en la nueva licitación fuere menor se le devolverá la fianza, después de hecha la liquidación de su servicio y cubiertas que sean las demás responsabilidades que les resulten.

27. Las cuestiones que se suscitaren sobre cumplimiento de este contrato, porque el contratista no se conforme con las disposiciones administrativas que se dicten, se resolverán por la vía contencioso-administrativa, con arreglo á lo dispuesto en el art. 2.º del Real decreto de 27 de febrero de 1852; pero ni por este ni por otro motivo podrá interrumpir el servicio de transportes que contrata.

28. El interesado, en cuyo favor quede el servicio, depositará la fianza y otorgará la escritura pública dentro de los ocho días siguientes al en que se le comunique la definitiva adjudicación del remate, obligándose á cumplir con todas las condiciones de este pliego y á responder de cualquiera falta de lo estipulado, al tenor de lo prevenido en el art. 2.º de la Real Instrucción de 15 de setiembre de 1852. Si así no lo hiciere, perderá la cantidad depositada para optar á la subasta, y teniéndose por rescindido el contrato, se sacará otra vez á pública licitación, á perjuicio suyo, según lo prescrito en el art. 5.º del Real decreto precitado.

Los gastos que originen la escritura pública y sus cuatro copias, serán de cuenta del contratista.

29. Para los efectos de este contrato se entiende renunciado desde luego todo privilegio ó fuero, incluso el de extranjería.

FIANZA.

30. El que resulte contratista, afianzará el cumplimiento del servicio que contrata con 800,000 rs. en metálico ó su equivalencia en cualquiera clase de valores de la Deuda pública, con interes admisible para este objeto, obligando además sus bienes y rentas habidos y por haber.

La indicada cantidad en metálico ó papel quedará en la Caja general de Depósitos, y no podrá disponer de ella el contratista hasta la finalización del contrato. Para la devolución será precisa comunicación de la Dirección general de Rentas Estancadas á la mencionada Caja.

OBLIGACIONES DE LA HACIENDA.

31. Las operaciones de entrega y recibo de sal en los almacenes de la Hacienda se verificarán de sol á sol inexcusablemente.

32. Los pedidos ó consignaciones generales se harán en el mes de octubre de cada año para el servicio del siguiente, excepto en el primero de contrata, que se verificará tan pronto como se otorgue la escritura de subasta.

33. La Hacienda satisfará al contratista por cada quintal de sal que transporte,

el precio que resulte en la adjudicación, debiéndose verificar el pago en los puntos de descarga á los ocho días siguientes al en que los Capitanes verifiquen definitivamente la cubal y buena entrega de los cargamentos; pero si no hubiese fondos disponibles en dichos puntos, se hará el pago en la capital de la provincia á que corresponda al mes de la expresada entrega.

34. Vencido dicho último plazo sin que los pagos se hagan, tendrá el contratista derecho á un interes anual de 6 por 100 de las cantidades en que se halle en descubierto, siempre que hubiese reclamado y gestionado el pago ante el Gobernador de la respectiva provincia.

Podrá el contratista exigir la rescisión de su contrato si los pagos sufriesen tres meses de demora, y la cantidad que se le adeudare en todo este plazo excediera de 200,000 rs., estando la reclamación de su abono en la Dirección general de Rentas Estancadas.

35. La Administración de fábricas, depósitos y alfolies sobre que se hagan consignaciones, facilitarán al contratista cuantas noticias desee para conocer el estado del servicio de que se encarga.

REGLAS PARA LA SUBASTA.

Primera. La subasta se verificará el día 3 de noviembre próximo en la Dirección general de Rentas Estancadas. Presidirá el acto el Director general, asociado del segundo Jefe de la misma y de uno de los co-Asesores de la Asesoría general del Ministerio de Hacienda, con asistencia del Escribano mayor del Juzgado especial de la provincia.

Segunda. La contrata se hará á virtud de licitación pública y solemne, fijándose para conocimiento de todos, los anuncios oportunos en la Gaceta y Boletines oficiales de las provincias.

Tercera. En dicho día 3 de noviembre, desde la una á una y media de la tarde, se recibirán por el Director general, en presencia de las personas que componen la Junta, los pliegos cerrados que presenten los licitadores en cuyo sobre se expresará el nombre de la persona por quien se halle inscrita la proposición. Estos pliegos se numerarán por el orden en que se presenten. Para que el pliego pueda ser admitido ha de presentar previamente cada licitador certificación de la Caja de Depósitos, expresiva de haber entregado en la misma la cantidad de 400,000 rs. en metálico ó sus equivalentes á los tipos establecidos en la clase de valores admisibles para este objeto.

También acreditará con los documentos correspondientes que con tres meses de anticipación á la fecha de la subasta paga alguna cuota por contribución territorial é industrial. Si fuese extranjero ó español de las provincias de Ultramar, presentará declaración en debida forma, suscrita por quien reuna las circunstancias expresadas, que se obligue á garantir con sus bienes la proposición que hiciere el licitador que carezca de aquellos. Sin estos requisitos no será admitida ninguna proposición. Dada que sea la una y media, se anunciará que queda cerrado el acto de la admisión de pliegos y documentos.

Cuarta. Inmediatamente se procederá á la apertura de los pliegos por el orden de su numeración. Estos se leerán en alta voz, tomando nota de su contenido el actuario de la subasta. En seguida se abrirá el pliego en donde conste el precio máximo fijado por el Ministerio de Hacienda para la conducción de cada quintal de sal, admitiéndose en su virtud la postura mas ventajosa. Si entre las proposiciones mas beneficiosas hubiere dos ó mas iguales, se admitirán pujas á la llana á los firmantes de las mismas por el espacio de un cuarto de hora, en que terminará el acto.

Quinta. El licitador que mas benefició el precio en la proposición hecha en el pliego, ó en el caso expresado anteriormente en la puja, se considerará como rematante del servicio.

Sexta. Hecho así, se elevará al Go-

bierno el expediente original, consultando su aprobación, con la cual se adjudicará definitivamente el remate.

Modelo de proposición que ha de contener el pliego que se menciona en la regla tercera para la subasta.

Séptima. D. N..... vecino de..... y que reúne cuantas circunstancias exige la ley para representar en acto público, enterado del anuncio inserto en la Gaceta del Gobierno núm..... y en el Boletín oficial de la provincia núm..... y fechas..... y de cuantas condiciones y requisitos se previenen para adquirir en pública subasta la adjudicación del servicio de conducciones marítimas de sal en la Península é Islas Baleares, se compromete á conducir cada quintal de este artículo, bajo las condiciones expresadas, al precio de..... rs. y..... céntimos.

(Fecha y firma del interesado.)

Madrid 27 de setiembre de 1858.—El Director general, Fernando Zappino.

Nota de los quintales de sal que como existencia permanente debe haber constantemente en alfolies y depósitos, según se previene en la condición 7.ª del pliego que ha de servir para la contrata de transportes marítimos de dicha especie.

DEPOSITOS Y ALFOLIES.	Quintales de sal.
Provincia de Alicante.	
Alicante (alfoli-depósito).	6.000
Denia.	1.800
Altea.	1.200
Villajoyosa.	1.000
Provincia de Almería.	
Almería.	4.000
Garrucha.	4.000
Adra.	1.500
Cabo de Gata.	500
Balerna.	150
Carboneras.	150
Provincia de Barcelona.	
Barcelona.	17.000
Mataró.	5.000
Villanueva.	3.000
Provincia de Cádiz.	
Cádiz.	800
Conil.	200
Vejer.	400
Tarifa.	300
Algeciras.	400
Ceuta.	300
San Roque.	400
Puerto Real.	200
Puerto de Santa Maria.	700
Rota.	300
Cibiciana.	250
Jerez.	2.000
Provincia de Castellón.	
Castellón.	6.000
Vinaroz (alfoli-depósito).	6.000
Provincia de la Coruña.	
Coruña.	8.000
Betanzos (alfoli-depósito).	20.000
Puentedeume.	2.500
Ares.	1.700
Ferrol.	2.700
Cedeira.	800
Santa Marta.	3.000
Barquero.	1.000
Padron (alfoli-depósito).	10.000
Noya.	2.000
Puebla.	4.000
Muros.	3.000
Corcubion.	3.000
Camariñas.	1.000
Lage.	2.500

Provincia de Gerona.	
La Escala (alfoli-depósito).	2.000
San Feliú de Guixols (alfoli-depósito).	4.000
Blanes.	1.500
Provincia de Granada.	
Motril.	1.000
La Rápita.	600
Almuécar.	600
Castell de Ferro.	300
Salobreña.	300
Provincia de Huelva.	
Ayamonte.	3.000
Isla Cristina.	8.000
Provincia de Lugo.	
Rivadeo (alfoli-depósito).	6.000
Vivero.	5.000
Provincia de Málaga.	
Málaga (alfoli-depósito).	6.000
Estepona.	1.000
Torre del Mar.	1.000
Fuengirola.	300
Marbella.	500
Nerja.	300
Provincia de Murcia.	
Cartagena.	1.000
Mazarrón.	700
Aguilas.	800
Provincia de Oviedo.	
Gijón (alfoli-depósito).	10.000
Castropol.	600
Luarca.	3.000
San Estéban.	700
Avilés.	1.000
Villaviciosa.	1.500
Rivadesella.	800
Llanes.	600
Provincia de Pontevedra.	
Pontevedra (alfoli-depósito).	12.000
Cangas.	1.000
Cambados.	2.000
Marín.	4.000
Redondela.	1.500
Vigo.	3.500
Villagarzia.	3.000
Tuy (alfoli-depósito).	500
Bayona.	1.000
Guardia.	200
Provincia de Santander.	
Santander.	10.000
Castrourdiales.	800
Torrelavega.	800
Laredo.	800
Santoña.	300
Provincia de Sevilla.	
Sevilla (alfoli-depósito).	30.000
Provincia de Tarragona.	
Tarragona (alfoli-depósito).	5.000
Tortosa.	2.500
Flix.	1.500
Provincia de Valencia.	
Valencia (alfoli-depósito).	8.000
Murviedro (Id. id.).	3.000
Cullera.	1.000
Gandia.	1.200
Provincia de las Islas Baleares.	
Palma (alfoli-depósito).	4.000
Mahón.	400

En los alfolies ó depósitos que tengan consignaciones sobre distintas fábricas ó depósitos, la existencia arriba indicada guardará proporción con la parte de aquellas correspondiente á cada uno de dichos establecimientos.

Madrid 27 de setiembre de 1858.—

Zappino.

Lo que se inserta en el Boletín oficial para conocimiento del público. Orense 6 de octubre de 1858.— El Gobernador, Hermenegildo Guitián.

